

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN



SALA LABORAL

Medellín, diecinueve (19) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO

La **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, conformada por los Magistrados Jaime Alberto Aristizábal Gómez, quien actúa como ponente, John Jairo Acosta Pérez y Francisco Arango Torres, procede dentro del proceso ordinario con radicado número 05001310501320170047601, promovido por **YURANY ANDREA BETANCUR GALLO Y MARÍA ANTONIA RAMÍREZ BETANCUR** contra **PROTECCIÓN S.A., POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A., FLOTA DEL CARMEN S.A. Y WILLIAM DE JESÚS MONTOYA VALENCIA**, con el fin de resolver el recurso interpuesto en contra de la providencia dictada por el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Medellín.

De conformidad con el numeral 1° del artículo 13 de la Ley 2213 de 13 de junio de 2022 “...Por medio de la cual se establece la vigencia permanente del Decreto Legislativo 806 de 2020 y se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia y se dictan otras disposiciones...” se toma la decisión correspondiente mediante

providencia escrita número **136**, previamente discutida y aprobada por los integrantes de la Sala.

ANTECEDENTES

Mediante acción judicial, solicitan las demandantes que se declare que el señor Jeiber Alexander Ramírez Zuluaga se encontraba afiliado a Positiva Compañía de Seguros S.A., que su muerte ocurrió con causa u ocasión a su trabajo, como conductor en la Flota del Carmen S.A., por lo cual, es de origen profesional. Consecuente a ello, se declare que les asiste razón al reconocimiento de la pensión de sobreviviente por su esposo y padre, desde el 6 de marzo de 2016 con los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 o la indexación.

Como fundamento de sus pretensiones indicó, que el señor Jeiber Alexander Ramírez Zuluaga laboraba como conductor para la empresa Transporte Flota del Carmen S.A., empresa que lo tenía afiliado a Riesgos Laborales Positiva Compañía de Seguros. Para el 6 de marzo del año 2016 explicó que el señor Ramírez Zuluaga conducía el vehículo automotor de placas WHI-296 de servicio público y estando en la vereda Aguas Claras del Municipio del Carmen de Viboral kilómetro 5 fue ultimado por uno de los pasajeros, evento que ARL Positiva calificó como de origen común, al no encontrar relación entre lo sucedido y la labor desempeñada. Explicó que la empresa aseguradora se esgrimió que el afiliado se encontraba bajo órdenes diferentes a quien lo tenía afiliado. Explicó entre la señora Yurani Andrea Betancur Gallo y el afiliado existió una relación conyugal desde el 29 de agosto de 2015, pero la convivencia existió desde fecha mucho anterior procreando la pareja la menor María Antonia Ramírez Betancur.

Admitida la demanda se notificó a la accionada la cual, dio respuesta de la siguiente manera:

Indicó que no es cierto lo indicado en la demanda, pues el señor Jeiber Alexander Ramírez Zuluaga no laboró para la empresa Flota El Carmen S.A., por el contrario,

el propietario del vehículo es el señor William de Jesús Montoya quien daba las órdenes pagaba el salario y ejercía la subordinación. Aceptó la muerte del afiliado el 6 de marzo de 2016 por causas violentas y la calificación dada al evento mediante dictamen 1304618 de 10/05/2016, pues indica que se debió a causas externas a la labor desempeñada. Aceptó la existencia del vínculo conyugal y expuso que lo demás debe ser objeto del debate probatorio. Se opuso a la prosperidad de las pretensiones e interpuso las excepciones que denominó: “Inexistencia de la obligación”, “Falta de legitimación en la causa por pasiva”, “Ausencia de causa para demandar”, “Mala fe de la parte demandante”, “Ausencia de nexo de causalidad entre las labores del trabajador y el siniestro”, “Enriquecimiento sin justa causa”, “Prescripción”, “Genérica o innominada”.

Igualmente, como excepción previa interpuso “Falta de integración del Litis consorcio necesario por pasiva con el fondo de pensiones, la empresa Flota del Carmen S.A. y el señor William de Jesús Montoya Valencia”, ordenándose por esta Sala de Decisión la integración por pasiva de los citados, quienes dieron respuesta así:

El señor William de Jesús Montoya Valencia indicó, que son ciertos los hechos narrados en la demanda y que se atiene a lo probado en el proceso, insistió en que de acuerdo a la certificación del 4 de noviembre de 2020 el vehículo se encontraba afiliado a la empresa Flota El Carmen. Así mismo expuso que el finado laboró para la empresa desde el 24 de mayo del año 2014 hasta la fecha de su muerte, mediante un contrato a término indefinido, y el vehículo se encontraba afiliado con la empresa. No se opuso a las pretensiones invocadas en el libelo gestor e interpuso la excepción que denominó: “De la falta de legitimación en la causa por pasiva”.

Flota El Carmen S.A., dio respuesta a la demanda indicando que, admite que la empresa de transporte público cumpliendo con el contrato de vinculación vehículo bajo la modalidad de afiliación contrató al señor Jeiber Alexander Ramírez Zuluaga como su conductor y asumió los pagos obligatorios a la seguridad social integral. Aceptó los hechos referentes a la afiliación y el vínculo contractual, en lo demás,

indicó que se atiene a lo dado en el debate probatorio. Invocó las excepciones de mérito que denominó: “Existencia de contrato laboral entre flota el Carmen SA y Jeiber Alexander Ramírez Zuluaga y debida afiliación y pago al SGSSS”, “Falta de legitimación material en la causa por pasiva”.

En **sentencia del veintiuno (21) de junio del año dos mil veintidós (2022)**, el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Medellín, declaró que los hechos en los que falleció el afiliado Jeiber Alexander Ramírez Zuluaga constituyen un accidente de trabajo en los términos del artículo 3 de la Ley 1562 de 2012, por lo que condenó a Positiva Compañía de Seguros S.A. a reconocer la pensión de sobreviviente a la señora Yurany Andrea Betancur Gallo como cónyuge y a la menor María Antonia Ramírez como hija en proporción del 50% para cada una, desde el 14/05/2016 con un retroactivo al 31/05/2022 en cuantía de \$32.307.647. Ordenó el pago de los intereses moratorios desde el 1 de diciembre de 2016, declaró improbados los medios exceptivos y condenó en costas a Positiva Compañía de Seguros.

RECURSO INTERPUESTO

Interpuso el apoderado de la Aseguradora Positiva que la sentencia desconoció la norma aplicable al caso, obviando la aplicación de la regla de la carga de la prueba de cara al art 167 del CGP en relación al origen del accidente de trabajo y de la enfermedad profesional, que hasta tanto no se desvirtúe a través de pruebas presentadas ante el competente, se tiene como común, y en el caso que ocupa la atención de la sala, indicó que al no haber por la parte demandante material probatorio alguno que desvirtúe el origen común, el homicidio doloso no era un riesgo asegurable. No habiéndose presentado prueba fehaciente que desvirtuó la presunción legal, debe aplicarse la consecuencia de la misma ley que es mantener la presunción. Consideró que de acuerdo al homicidio del que fue víctima el afiliado de ninguna manera se puede pensar que fue con causa o con ocasión del trabajo, dada la naturaleza de la labor misma desarrollada al momento del crimen. Explicó que, con causa o por ocasión son definiciones y no presunciones como se dice en la sentencia, porque la presunción de origen está determinada en la ley y la

definición se encuentra en el artículo 3 de la ley 1562 de 2012. Al no ser una presunción, al haberse dado la muerte en el lugar de trabajo, ello no es suficiente para determinarse que es de origen laboral el homicidio, pues no es una actividad de orden público como un policía o un guarda de vigilancia. Sostuvo que la muerte de la cual fue víctima el afiliado ninguna relación causal tiene con la labor desarrollada, ya que el suceso fue accidental como se dijo en el dictamen que no fue desvirtuado, pues lo que se asegura son los riesgos asociados con la prestación del servicio. Por tanto, solicita la revocatoria de la sentencia y de los intereses de mora ya que en la norma se habla de retardo injustificado y en el proceso se dieron juiciosos medios de defensa desde que se le contestó la solicitud pensional a la demandante. Consecuente a lo anterior solicita la revocatoria de la sentencia.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Protección S.A. solicitó confirmar la sentencia de primera instancia por encontrarse ajustada a derecho, pues el Decreto 1562 de 2012 en su artículo 3 define como accidente de trabajo el suceso repentino que sufra el trabajador en ejercicio de órdenes o fuera del horario de trabajo, el ocurrido en traslado a su lugar de trabajo, en ejercicio de trabajos recreativos, y no se determinó en el proceso los móviles o las causas del homicidio del afiliado, por lo cual, al haberse encontrado en su lugar de trabajo, debió la ARL desvirtuar, romper el nexo causal que ligaba las circunstancias. Indicó que todas las afirmaciones dadas en rededor de lo acontecido son sólo hipótesis porque la Fiscalía no esclareció el origen o las causas del homicidio.

El apoderado de Positiva de Seguros S.A. solicita la revocatoria de la sentencia, bajo el argumento que si bien el señor Jeiber Alexander falleció mientras conducía el vehículo de la Flota del Carmen, ello no implica que todo accidente que ocurra en ejercicio de sus funciones sea de origen laboral, por el contrario, aplica la presunción que todo accidente es de origen común, situación que la parte actora debió desvirtuar probatoriamente. Mencionó la sentencia de la Corte Suprema de Justicia 23202 del 2005 referente al nexo causal e indicó que en el caso que nos

ocupa no se logró proba que existiese responsabilidad de la aseguradora. Solicita por tanto se revoque igualmente la condena en intereses del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, pues la entidad no está en mora pues no se debe nada a la demandante, pues de no ser deudora de lo principal tampoco lo es de lo subsidiario. Solicitó se revoque la sentencia de primera instancia.

La parte demandante expuso, que no existen pruebas sobrevinientes, y conforme el debate probatorio realizado en su momento la ARL Positiva no desvirtuó la carga que tiene de demostrar que la muerte del joven Jeiber fue con ocasión a un tema distinto al tema laboral. Insistió en que el Artículo 3ro de la Ley 1562 de 2012 indicó que es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, lo que se dio en el caso de marras, solicitando la confirmación de la sentencia.

PROBLEMA JURÍDICO

Conforme el recurso interpuesto, consiste en determinar si el evento que ocasionó la muerte del afiliado Jeiber Alexander Ramírez Zuluaga se califica como evento de origen profesional o no, y en quién se deriva el pago de las obligaciones a favor de las beneficiarias Yurani Andrea Betancur Gallo y María Antonia Ramírez Betancur.

CONSIDERACIONES

Preliminarmente ha de indicarse, que el artículo 66A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, modificado por el artículo 35 de la ley 712 de 2001, restringe la competencia del superior en el recurso de alzada, a las materias objeto del recurso de alzada y en el presente asunto no tiene cabida el artículo 69 del CPT y SS pues la Nación no es garante de la pasiva Positiva Compañía de Seguros SA.

El artículo 164 del Código General del Proceso establece que toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso, y el

artículo 167 ibídem consagra el principio de la carga de la prueba que se explica afirmando que al actor le corresponde demostrar los supuestos fácticos en los cuales funda su pretensión y al demandado los hechos en que finca la excepción.

De manera clara en el proceso se narraron los hechos acontecidos el 6 de marzo del año 2016, pues del informe de accidente de trabajo realizado por el empleador, se indicó: “El trabajador se encontraba cubriendo la ruta de 1:30 pm del día domingo 6 de marzo y en el recorrido le dispararon dentro de la buseta causándole la muerte instantánea, Dirección: Km 5 vía el Carmen – Cargo Conductor”.

Es así como causado el hecho fatídico para la fecha indicada, se encontraba vigente la Ley 1562 de 2012 que sobre el tema indica:

“ARTÍCULO 30. ACCIDENTE DE TRABAJO. Es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte.

Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o contratante durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo.

Igualmente se considera accidente de trabajo el que se produzca durante el traslado de los trabajadores o contratistas desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador.

También se considerará como accidente de trabajo el ocurrido durante el ejercicio de la función sindical aunque el trabajador se encuentre en permiso sindical siempre que el accidente se produzca en cumplimiento de dicha función.

De igual forma se considera accidente de trabajo el que se produzca por la ejecución de actividades recreativas, deportivas o culturales, cuando se actúe por cuenta o en

representación del empleador o de la empresa usuaria cuando se trate de trabajadores de empresas de servicios temporales que se encuentren en misión.”

*La línea Jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia, ha determinado que hay una diferencia entre el accidente que ocurre **con causa del trabajo** y el cual se da **con ocasión al trabajo**.*

Sobre el accidente que se da con causa del trabajo se ha explicado que es aquel que refiere una actividad directa derivada del desarrollo de la labor para la cual se contrató al trabajador.

El que ocurre con ocasión del trabajo, es aquel que plantea una causalidad indirecta, es decir, que hay una relación entre el hecho funesto y las funciones que desempeña el trabajador. Respecto a esto, la Sala de Casación Laboral, precisó en sentencia SL 4318 de 2021:

“[...]

*De este modo, no tiene sentido la diferencia que hace la recurrente entre el riesgo creado o de la empresa y responsabilidad objetiva, porque, en esencia, ambas son objetivas y hacen referencia al riesgo profesional, de modo que no se trata de discutir cuál de tales teorías prevalece al momento de calificar el accidente; **lo realmente relevante, es que este se presente en el ámbito laboral.***

Adviértase, además, que el accidente que ocurre con causa del trabajo, se refiere a una relación directa derivada del desarrollo de la labor para la cual se contrató al trabajador y las actividades relacionadas con la misma; mientras que con ocasión del trabajo, plantea una causalidad indirecta, es decir, un vínculo de oportunidad o de circunstancias, entre el hecho y las funciones que desempeña el empleado.

Ahora, la Corte no desconoce que existen casos en los que se dan circunstancias externas que pueden romper el nexo de causalidad que debe establecerse entre el siniestro y el ámbito laboral, pero estas deben ser acreditadas en el proceso. “

*Evidentemente en el caso que nos ocupa, el trabajador Jeiber Alexander Ramírez se encontraba desempeñando la labor para que fue contratado, pues conducía el vehículo que le fue entregado para la ruta en la empresa Flota del Carmen, y si bien la pasiva se excusa de las funciones normales del conductor en razón a que no se presentó hurto en sus pertenencias y habían algunas hipótesis sobre que el señor Ramírez se encontraba inquieto por una “deuda” que tenía y algunos sucesos en relación a la muerte de su progenitor, **ninguna certeza se pudo arribar al proceso que determine que en efecto la muerte acaeció por situaciones ajenas a la prestación del servicio.***

Y es que la Sala debe recordar que al darse la muerte en el preciso momento en que el demandante se encontraba desempeñando sus labores, por orden de su empleador, es la empresa aseguradora del riesgo laboral quien debe probar la inexistencia de nexo causal alguno entre el fatídico hecho y la labor desempeñada, pues es de resaltar que el cuerpo sin vida del señor Ramírez fue extraído del vehículo que fue contratado para conducir, ya que la inspección técnica del cadáver realizada, narró el presunto ataque por parte de un pasajero en el momento en que se arribaba a la zona de descarga, actividad, sin duda, propia de la conducción vehicular intermunicipal.

Es así como de la revisión de la apertura del caso 056156000364201600079 realizada en la misma fecha del deceso, y siendo las 16:45 pm, el Técnico Investigador arribó al lugar los Manzanos de la Vía El Carmen de Viboral, encontrando en el vehículo con placas WHI 296 un solo cuerpo perteneciente al señor Ramírez Zuluaga, aún en el puesto del conductor, y con claridad se dejó expresado lo siguiente:

“Se conoció que un sujeto que se movilizaba como pasajero del bus, al momento de este detenerse a dejar pasajeros, se levantó de una de las sillas traseras del vehículo, caminó por el pasillo hacia adelante y se acercó hacia el conductor del vehículo disparando en varias ocasiones en la cabeza y luego huyó del lugar.

....”

Indudablemente la narración dada por el documento allegado en el expediente administrativo incorporado por Positiva, dejan ver el acaecimiento de un suceso repentino, durante la ejecución de órdenes del empleador que produjo indudablemente la muerte del trabajador.

Debe aclararse que en la sentencia SL 3778 de 2020 se indicó:

“De modo que, la tarea que acomete la Sala será determinar si erró el Tribunal al afirmar que la muerte del señor Leonel fue de origen común por no hallar acreditado que hubiese sido por causa o con ocasión de la labor desarrollada.

Al respecto, debe recordarse, que para que se presente un accidente laboral o contingencia de origen profesional, debe existir una íntima relación de causalidad entre el hecho dañoso y el servicio o trabajo desempeñado, ya sea de manera directa o indirecta. Sin embargo, no todo hecho que ocurra en el entorno laboral, resulta dable calificarlo siempre como tal, por cuanto pueden existir circunstancias que permitan desligarlo de la prestación de un servicio subordinado y, por ende, en este último caso debe catalogarse como de origen común.

Lo anterior significa que previamente debe estar acreditado ese nexo causal, entre la muerte y la prestación subordinada del servicio y en el evento, de encontrarse efectivamente demostrada dicha relación de causalidad, la Administradora de Riesgos Profesionales, hoy Laborales, que pretenda liberarse de su responsabilidad, es a quien le corresponde derruir esa conexidad, que no es este el caso”.

Recaía por tanto en este proceso la carga probatoria en la aseguradora, pues existiendo el nexo causal entre la labor que se estaba desempeñando por el trabajador y la muerte, estaba en sus hombros la prueba de los otros motivos que exculparan su aseguramiento, pues la afiliación realizada por el empleador tenía la única función del amparo a la luz del artículo 3 de la ley 1562 de 2012.

Son acertadas las conclusiones de la *a quo*, al considerar que el hecho que dio fin a la vida del asegurado Jeiber Alexander Ramírez Zuluaga constituyeron un accidente de trabajo.

Sobre los intereses moratorios ordenados en sentencia y objeto de recurso de alzada, bajo el entendido de un actuar diligente de la entidad se mantienen por las siguientes razones:

- Desde la investigación realizada de cara a establecer la procedencia del derecho de las demandantes Yurani Andrea Betancur Gallo y María Antonia Ramírez Betancur se constató la inexistencia de razones más allá de la prestación del servicio con ocasión de la muerte del trabajador sin fundamento alguno, basándose en hipótesis infunda mentadas.
- El ejercicio valorativo debió fundarse en pruebas sólidas cuya insuficiencia derivaba en la consecución del derecho y no en su negativa.
- El actuar diligentemente dentro del trámite procesal no es causal de exclusión de los intereses impuestos.

En virtud de lo expresado habrá de CONFIRMARSE ÍNTEGRAMENTE la sentencia de primera instancia del veintiuno (21) de junio del año dos mil veintidós (2022) por el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Medellín.

Costas a cargo de la parte apelante y a favor de las accionantes ante la improsperidad del recurso de alzada en cuantía de \$1.160.000.

En mérito de lo expuesto, la **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: Confirmar íntegramente la sentencia proferida el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Medellín.

SEGUNDO: Costas en esta instancia, a cargo de la parte apelante y a favor de las accionantes en cuantía de \$1.160.000

Lo resuelto se notifica en **EDICTO**. Se ordena regresar el proceso al Juzgado de origen.

Los Magistrados,

Jaime Alberto Aristizábal Gómez

John Jairo Acosta Pérez

Francisco Arango Torres

Firmado Por:

Jaime Alberto Aristizabal Gomez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

John Jairo Acosta Perez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Francisco Arango Torres
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Código de verificación: **aa31c37ade6f5eb067dbdc3123fefed4caad7b3c7578114d453993ad3a976c26**

Documento generado en 19/05/2023 02:53:12 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>